

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

RECUSACIÓN	
DEMANDANTE	ALBERTO CAÑIZARES MADARIAGA
DEMANDADO	COLPENSIONES y OTROS
RADICADO	5001-31-05-006-2022-00084-02
TEMAS	Recusación
DECISIÓN	Declara infundada la recusación.

Medellín, veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA, y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, procede a resolver de plano la recusación formulada al interior del proceso ordinario laboral, promovido por el señor **ALBERTO CAÑIZARES MADARIAGA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y OTROS**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 001**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I.- ANTECEDENTES

Se recibió por parte de esta Sala, el auto de fecha 06 de diciembre de 2023 remitido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, mediante el cual no se aceptó la causal de recusación presentada por el apoderado judicial de la parte demandante, Dr. Diego Ramírez Torres.

II.- SUPUESTOS FÁCTICOS.

El apoderado judicial del demandante mediante memorial de fecha 12 de octubre de 2023, le solicitó a la Juez Sexta Laboral del Circuito de Medellín, su apartamiento en el conocimiento y trámite del proceso ordinario laboral con radicado único nacional 05001-31-05-006-2022-00084-00, con fundamento en la causal séptima de recusación del art. 141 del Código General del Proceso. –pdf 23-

“ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:

(...)

7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación.

(...)”

Pues, según refiere el memorialista, el pasado 21 de septiembre de 2023, radicó ante la Comisión Seccional de Disciplina judicial de Medellín, una **queja disciplinaria** en contra de la Juez, argumentando que aquella en su práctica como juez incurrió en la falta contemplada en el numeral 7 del artículo 38 de 1952 de 2019¹.

¹ 7. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.

Para fundamentar su dicho arguyó que, ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, obra como apoderado en nueve (9) procesos, y que particularmente en varios procesos se han presentado los siguientes sucesos:

- i) En el proceso radicado 05001-31-05-006-2021-00331-00, la Juez, le ordenó a la demandante, datos de contacto, numero de celular de la señora Luz Dary Tejada y Mireya, las cuales mencionó en su declaración.
- ii) En el proceso radicado 05001-31-05-006-2020-00172-00, en la audiencia la juez adujo que: *“el doctor Diego Ramírez Torres, tiene atiborrado los despachos de la ciudad de Medellín con demandas”*
- iii) Y que, en el proceso radicado 05001-31-05-006-2021-00445-00, la juez intentó inducir a la demandante en error durante el interrogatorio de parte. Aunado de lo anterior, dijo que en ese proceso la funcionaria judicial compulsó copias de las actuaciones por él realizadas en calidad de representante judicial, ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Indicó, además, que esta misma funcionaria judicial, ha venido apartándose de la doctrina probable frente al tema de la carga probatoria que les incumbe a los fondos privados de pensiones, en los diferentes procesos ordinarios laborales donde se discute la ineficacia de la afiliación y/o traslado entre regímenes pensionales, citando para ello los procesos con radicado único nacional: 05001-31-05-006-2021-00331-00, 05001-31-05-006-2020-00172-00, 05001-31-05-006-2021-00445-00.

Frente a la recusación propuesta, la funcionaria de primera instancia en proveído del 06 de diciembre de 2023 se pronunció señalando que no había lugar a la recusación formulada, dado que: *“... todas las actuaciones o manifestaciones de que se duele el recusante, claramente indica que lo fueron dentro del proceso y relacionados directamente con el mismo. Pero adicional a lo anterior, la denuncia disciplinaria del apoderado recusante en contra de esta juez*

ya fue resuelta por Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia en providencia inhibitoria del pasado 31 de octubre, indicándose en la misma, que las conductas endilgadas a esta juez por el apoderado denunciante, no constituye falta disciplinaria.” –pdf 24-

III.-CONSIDERACIONES DE LA SALA.

Las normas que consagran las causales de impedimento y recusación, tienen como finalidad la de garantizar la imparcialidad del juez en el proceso, además al estar previamente definidas por la ley, evitan que las mismas se propongan de manera caprichosa por las partes en el proceso, con el fin de lograr cambios injustificados en el director del proceso, o dilación injustificada en la solución de la litis.

De este modo, para que resulte procedente una recusación, es necesario que se cumpla con las causales descritas en el artículo 141 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral y seguridad social en virtud de lo dispuesto en el art. 145 del CPTSS, veamos:

“ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:

- 1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.*
- 2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.*
- 3. Ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.*
- 4. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, curador, consejero o administrador de bienes de cualquiera de las partes.*
- 5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios.*
- 6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado.*
- 7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge**

o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación.

8. Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal.

9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.

10. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, o primero de afinidad, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito, sociedad anónima o empresa de servicio público.

11. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedad de personas.

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo.

13. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación del proceso.

14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar.” (Negrillas de la Sala).

Para fundamentar la solicitud de recusación, el Dr. Diego Ramírez Torres asegura que el 21 de septiembre de 2023, radicó ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Medellín, una **queja disciplinaria** en contra de la Juez, argumentando que aquella en su práctica judicial, incurrió en la falta contemplada en el numeral 7º del artículo 38 de 1952 de 2019, que determina como deber de todo servidor público: “*tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio*”.

Y como prueba de tal queja disciplinaria, el apoderado judicial incorporó el texto de la denuncia que tiene como cimiento los mismos

hechos aquí expuestos y la constancia de su radicación ante el Consejo Superior de la judicatura, Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Medellín. —pdf 23 folio 8 ss y 100.

La juez de primer grado, al resolver sobre la recusación presentada, no aceptó la misma, replicando que las manifestaciones de que se duele el apoderado judicial lo fueron por actuaciones relacionadas directamente con este proceso y que, específicamente la denuncia disciplinaria había sido resuelta de manera desfavorable a sus intereses.

De entrada, anticipa la Sala que, no se encuentran probados los supuestos para entender configurada la causal séptima del art. 141 del Código General del Proceso, invocada por el apoderado judicial, por cuanto esta normativa procesal prevé la formulación de una denuncia penal o disciplinaria, es decir, presupone la existencia de un acto a través del cual se da conocimiento a la autoridad competente de la existencia de unos **hechos concretos** que pudieran ser constitutivos de infracción disciplinaria, antes o después de iniciarse el proceso, pero se requiere además que la denuncia se refiera a **hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se encuentre vinculado formalmente a la investigación.**

Y en el presente asunto, si bien se corrobora que el apoderado judicial presentó el 21 de septiembre de 2023, ante la Comisión Seccional de Disciplina judicial de Medellín, una **queja disciplinaria** en contra de la Juez Sexta Laboral del Circuito de Medellín, los hechos que fundan dicha denuncia, están íntimamente relacionados con el proceso de marras, en el que el pasado 24 de agosto de 2023, se negó una recusación de similares contornos, pero en la que se alegó la causal séptima del artículo 141 del CGP.

A lo anterior se agrega que, quien presenta la recusación no demostró que se hubiere abierto formalmente investigación disciplinaria en contra de la Juez Sexta, resaltando que, por el contrario, la titular del

despacho afirmó en el auto del 06 de diciembre de 2023, que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, el 31 de octubre de 2023, emitió providencia inhibitoria en el trámite de la denuncia disciplinaria, concluyendo que las conductas endilgadas a la A quo por el apoderado denunciante, no constituyen falta disciplinaria; y si bien no hay prueba de la aducida decisión, el interesado era quien tenía la carga de probar la apertura formal a la que se hizo referencia, y no lo hizo.

En lo que respecta a las demás conductas endilgadas a la Juez Sexta Laboral del Circuito de Medellín, consistentes en el supuesto desconocimiento de la doctrina probable de la H. Corte Suprema de Justicia, frente a la problemática de la carga de la prueba en los procesos ordinarios laborales donde se discute una ineficacia del acto de afiliación y/o traslado entre regímenes pensionales, **como las pretensiones que se invocan en este demanda**, concluye la Sala que tal circunstancia no encuadra en ninguna de las causales previstas en el art. 141 de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, queda claro entonces que, en el presente asunto no existe la causal de recusación invocada, y por ello se declarará infundada.

Sin costas en esta actuación.

IV.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral,

RESUELVE:

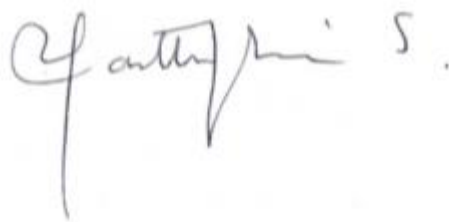
Primero: DECLARAR infundada la recusación formulada por el apoderado judicial de la parte ejecutante, Dr. Diego Ramírez Torres contra la Juez Sexta Laboral del Circuito de Medellín, según lo expuesto en procedencia.

Segundo: DEVOLVER INMEDIATAMENTE las diligencias al juzgado de origen para que se continúe con el trámite.

Tercero: Sin Costas en esta actuación.

Cuarto: Se ordena notificar por **ESTADOS** lo resuelto.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
Estados N ° 011 del 25 de enero de 2024.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/161>